



Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:
Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

Para leer el texto completo de la licencia, visita:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra
hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

La conversión de la acción penal pública a privada en el sistema jurídico colombiano examinada desde el paradigma de la figura del acusador privado¹

The conversion of public to private criminal action in the Colombian legal system examined from the paradigm of the figure of the private accuser

Paula Marcela Bejarano Romero²

Universidad Católica de Colombia

Resumen

La presente investigación jurídica tiene como eje central el análisis y estudio de los criterios dogmáticos, normativos y jurisprudenciales que permiten comprender las características, similitudes y diferencias de la figura del acusador privado, incorporada al sistema colombiano por medio de la Ley 1826 de 2017. Para tal fin, se presenta al lector un análisis descriptivo efectuado por medio del método de investigación deductiva, el cual busca determinar las razones jurídicas que permiten comprender la categorización normativa de la acción penal en el derecho interno, la titularidad de la misma en el sistema y la relación que dichos conceptos tienen con la determinación del legislador de regular la figura del acusador privado, teniendo como premisa la norma fundante básica de 1991.

Palabras clave: Acción penal; Acusador privado; Derechos fundamentales; Conversión de la acción penal; Régimen penal español, Análisis descriptivo, Investigación deductiva.

Abstract

This research analyses the dogmatic, normative and jurisprudential criteria in order to understand the characteristics, similarities and differences of the private prosecutor incorporated to the legal Colombian system through Law 1826 of 2017. For this purpose, a descriptive analysis is carried out by means of the deductive research method, which seeks

¹ Artículo de Reflexión elaborado como Trabajo de Grado para optar al título de Abogada bajo la Dirección del Dr. Rafael Velandia Montes, Docente Facultad de Derecho. Universidad Católica de Colombia.

² Estudiante de décimo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, código de estudiante 2110524, Email: pmbejarano24@ucatolica.edu.co. Bogotá D. C. 2020.

to understand the normative categorization of the criminal prosecution in the Colombian law, its titularity and the relation that these concepts have with the decision of the legislator to regulate the figure of the private prosecutor based on the Colombian Constitution of 1991.

Key words: Criminal prosecution; Private prosecutor; Fundamental rights; Spanish penal regime, conversion of criminal action, descriptive analysis, deductive investigation.

Sumario

Introducción. 1. La acción penal en el sistema jurídico colombiano: Un análisis desde el derecho procesal penal colombiano. 2. Titularidad de la acción penal en el contexto colombiano. 3. La figura del acusador privado en Colombia analizada desde la comparación con el caso español. 4. El acusador privado en España. Conclusión. Referencias.

Introducción

En el año 2017, el órgano legislativo colombiano decretó la modificación del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, por medio de la expedición de la Ley 1826, la cual estableció en el sistema un procedimiento penal especial abreviado y reguló la figura del acusador privado, mediante la incorporación de un nuevo Título I y un nuevo Capítulo I en el Libro VIII del plexo de procedimiento penal. Dicha manifestación del legislador tuvo el propósito fundamental de descongestionar los despachos judiciales mediante la implementación de la figura de la acusación privada, lo que permite tener acceso de una forma más eficiente frente a los comportamientos contrarios a la ley y sancionados por el Derecho Penal (Consejo Superior de Política Criminal, 2015).

Para fundamentar la constitucionalidad, pertinencia y necesidad de la implementación de la mencionada norma al sistema jurídico interno, el legislador colombiano tuvo como premisa el Acto Legislativo 06 de 2011, que permitió el ejercicio de la acción penal en aquellas situaciones en donde la lesión del bien jurídico tuviera rasgos menores de lesividad en el proceso de configuración de la conducta punible y, especialmente, el postulado superior contenido en el parágrafo 2º del artículo 250 de la norma fundante básica, en donde el constituyente estipuló que la Fiscalía General de la Nación constitucionalmente funge como órgano persecutor de conductas que constituyan hechos punibles, sin perjuicio de la facultad que le otorgó el legislador a la víctima o a cualquier tercero diferente a la Fiscalía para poner en funcionamiento el aparato judicial (Asamblea Nacional Constituyente, 1991).

Dicha norma, sin duda, tiene el propósito de establecer estrategias institucionales en el ordenamiento jurídico penal colombiano y busca garantizar el acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad para la víctima, que es el querellante legítimo de la conducta punible³, víctima que, en los términos establecidos en la mencionada ley, está facultada para ejercer la acción penal por medio de la representación de su abogado, para lo que se estipuló, de manera expresa, que es necesario solicitar al fiscal de conocimiento la

³ Establecida en el artículo 9 de la ley 599 de 2000, como típica (cuando cumple con los requisitos del tipo penal), antijurídica (que pone en riesgo o lesione un bien jurídico) y culpable (cuando se demuestre la responsabilidad de la persona) (ley 599 de 2000)

conversión de la acción penal de pública a privada, de forma escrita y siempre y cuando se acredite sumariamente la condición de víctima.

Así mismo, el artículo 27 de la Ley 1826 de 2017 establece una obligación dirigida al Fiscal General de la Nación relacionada con la reglamentación de la solicitud de conversión y reversión de la acción penal en el marco de la figura del acusador privado, en donde se estipuló que era necesario que se regulará de forma clara y organizada el procedimiento interno de la entidad. Por ello, el máximo representante del ente acusador, en uso de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias que le fueron atribuidas, profirió la Resolución 2417 de 2017, en la que se establece el procedimiento interno para la implementación de la figura del acusador privado en la Fiscalía.

Por tal motivo, el presente artículo busca determinar cuáles son las características de la figura del acusador privado incorporada al sistema colombiano por medio de la Ley 1826 de 2017 para realizar una comparación con la Ley 906 de 2004, en la que no se encontraba establecida esta figura, y luego hará lo mismo con su similar en el régimen jurídico penal español, para establecer las diferencias con nuestro ordenamiento jurídico.

Para tal fin, se realiza un análisis de tipo deductivo – es decir, un estudio que “permite pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares” (Ruiz, 2007, p. 20) – que aborda el ejercicio del *ius puniendi*, que según García hace referencia al derecho que le proporciona el sistema jurídico a un funcionario judicial de sancionar penalmente a los presuntos infractores de las normas (García, 2008).

Y del concepto señalado por López (2007) el derecho que tiene el estado para sancionar, ya que es el único que tiene potestad para decidir si existe o no delito y cuál es la pena a imponer. (p.65) Así como también de la jurisprudencia de las altas cortes al respecto y la doctrina, esto con la finalidad de explicar su concepto, sus características y sus elementos esenciales.

A lo largo de este documento se abordará la titularidad de la acción penal en el contexto colombiano y se estudiará específicamente la figura del acusador privado, que fue establecida en el procedimiento penal especial abreviado por la Ley 1826 de 2017, que

luego será comparada con el sistema jurídico penal español, para obtener una idea más clara de lo que es el acusador privado.

En razón a lo anteriormente expuesto, se plantea la siguiente pregunta investigativa: ¿Es el acusador privado una figura aplicable, que genere gran impacto en el procedimiento penal colombiano, teniendo en cuenta las características con las que se emplea en nuestro sistema jurídico? Para tal fin, se realizará un estudio desde la perspectiva normativa y jurisprudencial de la mencionada figura, con lo cual se precisará el concepto, el alcance y los límites que posee actualmente el ejercicio de la acción penal privada, así como la relación que tiene dicha figura con el ejercicio de funciones públicas de manera transitoria y con los derechos fundamentales de los querellantes legítimos.

1. La acción penal en el sistema jurídico colombiano: un análisis desde el derecho procesal penal colombiano.

La acción penal en el paradigma de la teoría jurídica procesal penal ha sido abordada desde el ejercicio del poder punitivo del Estado o *ius puniendi*, es decir, es un concepto que se relaciona directamente con el fin represivo del derecho punitivo y con la dimensión de intervención del Estado como elemento de control social. Por lo tanto, tiene como límite los derechos fundamentales – los cuales han sido denominados como “normas téticas que están sustraídos a las decisiones políticas, que determinan límites y vínculos a los poderes mayoritarios de gobierno y, que están sustraídos a la transacción (...) son inalienables, universales e indisponibles” (Ferrajoli, 2011, p. 774). En especial, el principio de legalidad, el cual ha sido considerado como un mandato de optimización que, en el contexto del Derecho Penal, “tiene una función garantista” (Ferrajoli, 1995, p. 125), es decir que su propósito fundamental es salvaguardar la coherencia y congruencia en la aplicación de las reglas que integran el modelo escalonado de normas de los sistemas. Al respecto, la Corte Constitucional señaló, en la sentencia C-699 de 2015, que:

Respecto de la capacidad del estado de sancionar debe tenerse en cuenta la importancia del principio de legalidad, para que al momento de ejercer poder, este deba someterse a la ley que se encuentra vigente en el momento de la ocurrencia de los hechos. Esto lo que quiere decir es que, cuando el estado deba sancionar, lo haga teniendo en cuenta que la conducta se encuentre establecida en la ley. (Corte Constitucional, 2015).

Dicho ejercicio del poder punitivo del Estado, conforme a la órbita de la legalidad y del debido proceso – que se encuentra en nuestro sistema colombiano en el artículo 29 de la Constitución de 1991–, tiene como principal característica el establecimiento del procedimiento penal por vía legislativa, es decir, la inclusión de fases jurídicas concatenadas en el sistema que requiere necesariamente de un proceso de creación normativa, en donde el legislador opera conforme a sus funciones constitucionales, con el propósito de regular y crear determinado campo de acción de la actuación jurisdiccional del operador judicial penal. De ahí que con el ejercicio de la acción penal se activa el poder judicial y se le da aplicabilidad al “ejercicio y contenido de la actividad jurisdiccional en un supuesto concreto” (Álvarez, 2017, p. 1).

Por lo anterior, en este primer acápite se abordará la acción penal desde el paradigma procesal penal teniendo en cuenta que en el presente artículo ella se analiza como una forma de ejercicio del *ius puniendi*, que consiste en que, según la sentencia C-762 de 2009 de la Corte Constitucional, el Estado tiene la potestad de imponer sanciones a conductas que afecten a bienes jurídicos protegidos, es decir, conductas que son consideradas por la ley contrarias a derecho (Corte Constitucional, 2009) – y no como un elemento de responsabilidad de los sujetos ante la comisión de conductas punibles – en donde el objeto se centra en estudiar “la abstracta descripción que el legislador hace de una conducta humana reproachable y punible” (Reyes, 1990, p. 96).

Para comenzar, es necesario precisar algunos conceptos determinantes para abordar de manera específica el concepto de la acción penal, dentro de los cuales se encuentran la actuación o actividad jurisdiccional y el proceso. La actuación o actividad jurisdiccional ha sido abordada especialmente desde la esfera heterocompositiva, en donde el eje central de análisis es la solución de un conflicto o controversia jurídicamente relevante, por medio de la intervención de un tercero que opera de manera objetiva y fundada conforme a los preceptos legales establecidos en la materia y en el marco del *ius puniendi*.

En ese sentido, se ha establecido, en el marco de la dogmática penal, que la actividad jurisdiccional es una potestad que hace parte del monopolio estatal, en donde la administración de justicia corresponde a un fin superior, en el cual se sitúa como centro y objeto de análisis “el poder o autoridad que tiene alguno para gobernar y poner en ejecución las leyes” (Escriche, 1981, p. 143), evento que imperativamente se relaciona con “la independencia de cualquier juez en un Estado de derecho, en razón a la independencia de los asuntos sometidos a su conocimiento” (Bernal & Montealegre, 2013, pág. 48). Dicha facultad, atribuida por mandato legal a los operadores judiciales, de manera simultánea se relaciona con el concepto de competencia, en donde aspectos como la materia, el territorio y la cuantía constituyen un aspecto transversal de análisis.

Con respecto a lo mencionado en el párrafo anterior, D’Onofrio (1954) explica que el factor de competencia es un elemento estructural de la acción penal, la cual, al ser abordada desde el marco procesal penal, implica su consideración como “una única potestad jurisdiccional (...) el criterio de jurisdicción se autolimita por el de competencia que puede

definirse como el ambito de la jurisdicción misma” (p. 125). En cuanto a lo estipulado en el artículo 2 de la Ley 1826 de 2017 se inicia el proceso “por medio de la denuncia efectuada por la víctima de una conducta punible quien es considerada como querellante legitimo, y/o por medio de las denominadas noticias criminales, peticiones especiales o querellas” (Ley 1826 de 2017). En ese orden de ideas,

La función jurisdiccional del Estado se activa con la acción penal, por la voluntad de poner en conocimiento del juez determinado asunto categorizado como contrario al Derecho, así como por la necesidad de obtener justicia y ejecución real de una sanción punitiva, ya que en un estado democrático se da a conocer un derecho penal que se enmarca en un ámbito de respeto hacia los derechos y las libertades de los miembros de la sociedad, lo que nos lleva a entender que, cuando lo anterior es aplicado, se ve reflejada una forma determinada de entender la sociedad y el estado (Fernandez, 1994).

En segundo lugar, una vez ejecutada la acción penal, el juzgador asume la competencia del asunto, evento en donde el proceso adquiere protagonismo, pues silogísticamente se aplican las normas y se establece una sanción en caso de que se logre probar al operador judicial la responsabilidad del procesado, pues “en el ordenamiento jurídico colombiano se obliga a un análisis jurídico previo a la toma de decisiones”, situación prevista en el artículo 2 de la Constitución Política frente a la garantía de derechos y deberes como fines esenciales del estado, entre otros (Bernal & Montealegre, 2013, pág. 71) y, finalmente, una vez proferida la decisión, el objeto de la acción se circunscribe al cumplimiento de la sanción impuesta.

Ahora bien, de manera conexa al concepto de la actividad jurisdiccional, se encuentra el proceso desde una perspectiva procesal penal, que se circunscribe, según Echandia, como la metodología de la investigación adelantada por los funcionarios judiciales (Echandia, 1981, p. 161), con lo cual entra en operatividad el *ius puniendi*, materializado en dicho evento por medio de la puesta en marcha de la acción penal. Es decir, la facultad del Estado de administrar justicia, además de requerir normas específicas que asignen la competencia a los operadores judiciales para conocer de los asuntos, requiere del ejercicio de la acción penal que tiene como fin concretizar un derecho y una situación particular a nivel

jurisdiccional, y esto implica una trascendental relación jurídica procesal. Echandía explica al respecto que la relación jurídico procesal se determina por un vínculo que se genera luego de dar inicio al proceso (1981, p. 175). Esto, como se ha venido mencionando, en el espectro u órbita de la potestad del Estado plasmada en el ejercicio del *Ius puniendi* y en el marco de la acción penal, cuya finalidad es materializar el postulado fundante de justicia en la administración de justicia y en las relaciones jurídicas complejas en donde participan el operador judicial, las partes como la Fiscalía y el Ministerio Público y las víctimas.

En ese orden de ideas, el proceso, como conjunto de actos coordinados que se despliegan ante los jueces, constituye una actividad que tiene por objeto la producción de una providencia judicial que se categoriza como el efecto jurídico de la acción penal y, así mismo, como afirma Urbano, el fin del proceso penal es la reclamación ante el Estado por parte de las víctimas y de los terceros de buena fe del restablecimiento de sus derechos por la vulneración de los mismos por parte de los sujetos activos responsables de la comisión delictiva o de la absolución de quienes no han tenido participación en los hechos investigados (Urbano, 2006, pág. 116). Por lo tanto, “es de mucha utilidad tener en cuenta cuáles son los parámetros que debe tener en cuenta el juez y determinar si los fines que configura la constitución para el proceso penal, son o no constituyentes para el ejercicio del control” (Urbano, 2006, pág. 112).

Precisados los elementos básicos de la actividad jurisdiccional y del proceso, es necesario mencionar, en términos generales, que la acción penal es de monopolio estatal, por ello es de competencia de la Fiscalía, como titular de la acción penal, acusar a los responsables de la comisión de delitos y de los jueces, proferir la respectiva sentencia condenatoria en contra de aquellos, situación que se sustenta en el progreso paulatino del sistema penal, el cual optó por esto en lugar de las conductas constitutivas de venganza privada, que estaban basadas en algunos contextos históricos como la denominada ley del talión, “que no era otra cosa que la similitud en venganza a fin de que una persona sufra lo que hizo” (Salvatierra, 2004).

Ahora bien, en cuanto a su origen, Vargas (2012) señala que “el *Ius puniendi* se radicó primero en el emperador, luego, en el monarca absoluto y finalmente, en el Estado” (p. 72), con lo que la acción penal se enfocó en la materialización del interés público y en

salvaguardar los bienes jurídicamente protegidos de todos los individuos, en donde es premisa la categorización de la persecución penal por el aparato estatal, esto con el fin de lograr la materialización de la justicia material. Pero para otros, como Montero, el *ius puniendi* es de naturaleza pública y por lo tanto debe radicarse en cabeza del Estado (Montero, 2010, p. 17).

En ese orden de ideas, es importante tener en cuenta que la acción penal, como manifestación del *Ius Puniendi*, es de monopolio del Estado, se ejecuta con la puesta en marcha del aparato judicial y posibilita el acceso al sistema con el propósito de solicitar la protección de bienes jurídicamente tutelables a un operador jurídico, con respeto de la legalidad, el debido proceso y la especial sujeción a la ley.

La acción penal se encuentra enmarcada no solo en el accionar del aparato judicial, sino también se relaciona de manera directa con el concepto del fin del proceso y con el pronunciamiento que el juez efectúa en el marco del proceso penal por medio de las providencias. Es decir, la acción penal implica de manera simultánea una facultad y una obligación. Implica una facultad porque es un poder de categoría jurídica y, de manera conexa, implica un deber al órgano jurisdiccional de emitir un pronunciamiento concreto sobre una noticia criminal específica, en donde el fundamento central es la actuación procesal encaminada a la activación de la función jurisdiccional para la actuación del derecho penal de orden sustantivo. Es por esto que por medio de la activación del aparato jurisdiccional, a través de una noticia criminal, se da apertura al proceso penal, con lo que surge la obligación de emitir un pronunciamiento motivado sobre lo denunciado y denota el nexo entre acción penal, jurisdicción y proceso como elementos de organicidad del ordenamiento.

En el ordenamiento colombiano, el ejercicio de la acción penal se encuentra radicado de manera general en el Estado, por lo que, en los términos del artículo 66 de la Ley 906 de 2004, fue determinado como: La Fiscalía General de la Nación por mandato constitucional, esta revestida de autoridad para indagar y, si fuere el caso, investigar y acusar a los responsables de la comisión de conductas delictivas, dadas a conocer por medio de noticias criminales, interpuestas por los directamente afectados de los hechos punibles (Ley 906 de 2004), situación que guarda especial respeto a lo consagrado en el artículo 250 de la

Constitución, en donde se establecen las funciones de investigación y juzgamiento de la acción penal, normativas que serán abordadas de manera específica en el siguiente acápite.

2. Titularidad de la acción penal en el contexto colombiano

La titularidad de la acción penal en el sistema jurídico colombiano es un tema trascendental para el desarrollo del presente escrito, pues, para efectuar el análisis de la figura del acusador privado, no basta con el estudio de la categorización doctrinal, normativa y jurisprudencial de las acciones penales, además, es necesario comprender, por una parte, la conducta punible como típica, antijurídica y culpable y, por otra, la facultad que el legislador le atribuyó al ente acusador – Fiscalía General de la Nación – del ejercicio de la acción penal y de desarrollar la investigación de los acontecimientos que revisten las características de una conducta punible. Lo anterior es necesario para poder entender sus diferencias y quién detenta la titularidad de la acción penal. Por dichas razones, en este acápite se presenta un análisis de la mencionada titularidad de la acción penal en el ordenamiento jurídico colombiano, para lo cual se abordará su forma de incorporación al sistema interno, su desarrollo paulatino en la praxis y algunas consideraciones jurisprudenciales que han servido a los operadores para dilucidar la naturaleza jurídica de la mencionada facultad.

Para comenzar, es imperativo precisar que la titularidad de la acción penal constituye, como lo menciona Chaves, una importante facultad adquirida por el Constituyente de 1991 cuando dio origen al órgano persecutor de la acción penal como lo es la Fiscalía General de la Nación (Chaves, 2012). Lo anterior tuvo como eje central el fortalecimiento del ejercicio de la función administrativa en el contexto colombiano, la salvaguarda de la participación ciudadana en los asuntos públicos y la prestación eficaz y eficiente del servicio público de administración de justicia.

Dentro de las modificaciones que tuvo la Constitución de 1886, algunos constituyentes propusieron la creación de la Fiscalía General de la Nación al tomar en cuenta que era imperativo el establecimiento en el sistema interno colombiano de un ente investigador en materia penal que tuviera a su cargo presentar acusaciones a los operadores judiciales, que buscará garantizar los derechos fundamentales de los imputados y de las víctimas en los procesos judiciales. Por tal motivo, la Fiscalía se crea con el fin de enmendar las fallas

como la falta de agilidad y rapidez que surgieran en el procedimiento, siendo un ente autonomo, descentralizado a nivel nacional (Fiscalía General de la Nación, 2012, p. 6). Terminado el proceso constituyente, el 1° de julio de 1992, se materializó la creación de la Fiscalía General de la Nación, la cual tuvo como primer Fiscal a Gustavo de Greiff Restrepo, que tuvo a su cargo la estructuración de las bases del nuevo ente acusador, el cual, a grandes rasgos, se encuentra integrado, hoy en día, de acuerdo a la Ley 270 de 1996, arts. 23-33, y el Decreto 16 de 2014, por el cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación⁴.

Bajo esa actitud, es necesario señalar que la Fiscalía General de la Nación fue creada como una entidad que hace parte de la Rama Judicial, con autonomía administrativa y presupuestal para el cumplimiento de sus funciones, que tiene como objetivo investigar delitos y acusar presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes, lo cual, en conjunto, implica el despliegue de medidas tendientes a lograr la eficacia en el ejercicio de la administración de justicia y, especialmente, del *Ius Puniendi* considerado como el derecho o facultad del Estado para castigar.

Al respecto, el artículo 250 de la Constitución Política de 1991 – modificado por los Actos Legislativos 3 de 2002 y 6 de 2011 – señala que las competencias generales del ente acusador son ocho, dentro de la cuales se encuentra efectuar la solicitud al juez de control de garantías para que dicho operador judicial adopte las medidas que considere pertinentes con la finalidad de asegurar la presentación y asistencia de los imputados a procesos penales, la preservación y custodia del material probatorio hasta tanto se ejerza el derecho contradicción y la protección de los ciudadanos y de las víctimas. Así mismo, también se estableció la facultad para realizar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones, con previa autorización por parte del juez de control de garantías; se determinó que los fiscales están facultados para poner en conocimiento del juez el documento denominado escrito de acusación, con el fin de dar apertura a un juicio oral público y con garantías procesales (Secretaria del Senado, 1991) entre otras funciones generales detalladas expresamente en el mencionado artículo superior, relacionadas de

⁴ Que se encuentra integrada por el Fiscal General, el Vicefiscal General, el Secretario General, los Fiscales Delegados, la Dirección Nacional de Fiscalías y del C.T.I y por entidades adscritas como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

manera directa con la investigación y acusación de las infracciones al derecho penal interno.

Junto a dichas funciones constitucionales se encuentran las de origen legal, las cuales regularon la aplicabilidad eficaz de lo estipulado en el texto superior: dentro de dicho grupo se encuentra la Resolución 2417 de 2017, la cual tiene como objetivo establecer el procedimiento para garantizar control en la conversión de la acción penal y el desarrollo de la misma de acuerdo a las pautas establecidas en su artículo 2 en el que se establece que cuando la solicitud de conversión de la acción penal de pública a privada sea admitida, el acusador privado, debe cumplir con las funciones que adelantaban las autoridades públicas en cuanto a la investigación y acusación, así como el apoderado debe actuar con celeridad, sin que existan retrasos o dilaciones en el proceso. De igual forma, esta Resolución, en el artículo 7, establece que la solicitud de conversión de la acción penal debe hacerse por medio de un documento escrito presentado por la víctima a través de su apoderado, la misma solicitud debe cumplir unos requisitos como demostrar la calidad de víctima, adjuntar el poder del abogado y cuando existan varias víctimas deberán manifestarse en la solicitud (Fiscalía General de la Nación, 2017), y así mismo se encuentra el Decreto Ley No. 016 de 2014 (Modificado por Decreto Ley 898 de 2017) en donde el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confieren el literal a) del artículo 1° de la Ley 1654 de 2013, señaló de forma específica las funciones de los funcionarios de la entidad.

Así las cosas, en el artículo 4° del Decreto mencionado anteriormente se establecen como funciones del Fiscal General de la Nación “la formulación y adopción de políticas, directrices, lineamientos y protocolos para el cumplimiento de las funciones asignadas al órgano de persecución penal en la Constitución y en la ley; la representación legal de la entidad; la competencia para asumir las investigaciones y acusaciones que ordena la Constitución y la dirección, coordinación y control del desarrollo de la función de investigar y acusar al presunto responsable de la comisión de un delito” (Decreto 16 de 2014).

En la misma norma, en el artículo 4°, numeral 7, se determinó que tiene a su disposición la formulación de políticas para garantizar la eficiente puesta en práctica de la

acción penal, basada en el principio de unidad de gestión y la dirección de la policía judicial que de forma permanente este revestido cualquier ente público (Decreto 16 de 2014). Entre otras funciones, que, en conjunto, buscaron coordinar las competencias de la Fiscalía General de la Nación como titular de la acción penal, con la prevalencia de los Derechos Humanos y fundamentales estipulados en la Constitución en su parte dogmática o sustancial.

3. La figura del acusador privado en Colombia analizada comparativamente con el caso español.

Para empezar el desarrollo de este acápite, es indispensable continuar con la línea argumental abordada previamente en torno al análisis de la titularidad de la acción penal, pues el establecimiento de la figura del acusador privado en el sistema interno parte necesariamente del examen de la facultad asignada por mandato constitucional y legal al ente acusador. Como se explicó, en el ámbito del derecho penal colombiano, la Fiscalía General de la Nación, en los términos del artículo 250 superior, es una entidad autónoma en sus actuaciones, que tiene la facultad de acusar ante el operador judicial a individuos por la ejecución de comportamientos que han sido criminalizados.

No obstante, dicha facultad relacionada con la titularidad exclusiva de la acción penal en cabeza del ente acusador, en el año 2011, fue modificada por el constituyente derivado, que expidió el Acto Legislativo 06, artículo 2°, donde se determinó la creación de un nuevo párrafo segundo para el artículo 250 constitucional, en el que eje central es la extensión de dicha facultad a las víctimas u otras autoridades diferentes a la Fiscalía General de la Nación. Dicho artículo expresa que el legislador tiene la potestad de asignar la titularidad de la acción penal, ya sea a la víctima o un tercero cualquiera. Sin embargo, en esa norma se determinó que la Fiscalía actuaría de forma preferente (Acto legislativo 06 de 2011).

Al tomar en cuenta su exposición de motivos, la reforma tenía como eje central hacer más efectivo, ágil y rápido al procedimiento, darle la posibilidad a la víctima o un tercero de poner en práctica la acción penal y descongestionar los despachos judiciales (Congreso de la república, 2011, pág. 3). Al respecto, Velandia señala que el representante designado ante el Estado debe actuar con la responsabilidad pertinente para tomar decisiones que generen un cambio normativo y así garantizar un bienestar social (2014, p. 100), que fue,

precisamente, lo que se buscaba con la reforma. Así, la propuesta se fundó en los siguientes argumentos:

En primer lugar, la reforma versó en implementar medidas que permitieran bajar el grado de congestión de la Fiscalía General de la Nación, en especial durante la etapa de indagación preliminar, en donde la entidad destina la mayor parte de sus recursos humanos y materiales a investigar “comportamientos humanos típicamente antijurídicos y culpables que se encuentran conminados con una sanción penal” (Ripollés, 2011, p. 126), es decir, conductas punibles.

En segundo lugar, se buscó disminuir la correlativa situación de impunidad (Velandia-Montes, 2015, p. 94), por cuanto el sistema acusatorio estaba generando “una situación insostenible de impunidad y una crisis muy grave de la justicia penal” (Congreso de la república, 2011, pág. 3). Al respecto, la Corte Constitucional señaló, en la sentencia C-879 de 2008, que: Se necesitaba descongestionar la fiscalía y por eso la creación del nuevo artículo 250 de la constitución, pero la contradicción era porque la ley no podía privar a la fiscalía del monopolio de la acción penal (Corte Constitucional, 2008).

En vista de lo anterior, se infiere que el constituyente derivado estableció, como parámetro fundante del proceso de reforma de la normativa constitucional antes mencionada, la necesidad del sistema de ejecutar políticas y medidas que permitieran disminuir la congestión jurisdiccional, lo cual implicaba un resultado correlativo de tipo positivo tendiente a frenar e incluso evitar el aletargamiento de la administración de justicia en el proceso de indagación de los delitos, lo cual posibilitó y autorizó a las víctimas a tomar un papel activo en el curso del proceso penal, el cual de manera simultánea tiende a materializar de forma real y efectiva el derecho a la defensa y la protección de los derechos de raigambre fundamental.

Para comprender mejor la figura del acusador privado, es necesario tener en cuenta que uno de sus principales antecedentes en el ordenamiento jurídico colombiano es el Código de Procedimiento Penal de 1991, en donde se estipuló, en el artículo 45, que, en el marco del proceso penal, la víctima podía erigirse como parte civil si, y solo si, dicha constitución se realizaba por ella con el objetivo de recibir una compensación económica. Dicha posibilidad, de acuerdo con la sentencia C-293 de 1995, fue considerada como un criterio

que no contrariaba el orden jurídico vigente. Sin embargo, según lo estableció la sentencia C-228 de 2002, la parte civil está constituida por la víctima y su representante y la intervención en el proceso debe hacerse bajo el principio de igualdad ya que la víctima no solo tiene un interés económico sino que también tiene interés en buscar la verdad, justicia y resarcimiento, y, como consecuencia de esto, puede solicitar la práctica de pruebas e interponer los recursos que considere necesarios (Corte Constitucional, 2002). Como lo menciona Restrepo, en esta sentencia se refleja el desarrollo de la parte civil realizando un análisis de los derechos de las víctimas para demostrar el interés adicional a la reparación en el proceso (Restrepo, 2012).

Sin embargo, tal concepción luego tuvo un cambio con la expedición de Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), en tanto la noción de parte civil se excluyó del sistema y con ello la víctima considerada como parte del proceso penal adquirió la facultad de incoar el incidente de reparación integral, ya que, como lo menciona la sentencia C-209 de 2007, “se le permite a la víctima tener en cuenta el escrito de acusación no solo con fines informativos sino que también con el fin de estar involucrada en el proceso penal”, y en el artículo 11 del Código de Procedimiento Penal se establece que: dentro del proceso penal, las víctimas tienen el derecho a tener un trato digno, a ser protegidas y que se aplique la reparación integral de los perjuicios y entre otras cosas a tener información de la decisión definitiva de la persecución penal. (Arevalo & Fajardo, 2013, pág. 108).

Posteriormente, la Ley 1153 de 2007 creó un régimen de contravenciones – entendidas por Ripollés como, cualquier conducta que produzca daño de una forma menor que un delito, tendrá una sanción tenue. (Ripollés, 2011, p. 126) – que otorgaba a la víctima la posibilidad de promover la acción contravencional directamente o representada por un abogado. No obstante, la Corte Constitucional, en la sentencia C-879 de 2008, consideró que dicha ley era inexecutable porque el artículo 250 constitucional asignaba la titularidad de la acción penal exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación, por ello dicha entidad era la única autorizada para adelantar la instrucción penal.

Por tal motivo, el alto tribunal consideró en dicha oportunidad que no era posible modificar un artículo de la Constitución por medio de una ley, ya que era necesario un acto

legislativo para modificarla. En ese sentido, la Corte señaló, de manera expresa, que no existía la posibilidad de que la ley de pequeñas causas continuara sin un ente que hiciera las veces de investigador, labor que no podía ser llevada a cabo por la Policía Nacional (Corte Constitucional, 2008).

Luego, con sustento en el Acto Legislativo 06 de 2011, que adicionó un párrafo al artículo 250 constitucional, fue proferida la Ley 1826 de 2017, cuyo artículo 1 modificó el artículo 66 del CPP añadiendo lo siguiente: si se autoriza la conversión de la acción de publica a privada, será facultad del acusador privado investigar y acusar (Ley 1826 de 2017).

Así, la Ley 1826 de 2017 define en su artículo 27 al acusador privado como la persona que ve afectado algún bien jurídico con la comisión de un delito, que reúne las características del querellante legítimo y que, en consecuencia, tiene la facultad de poner en práctica la acción penal (Ley 1826 de 2017). Así como también lo expresa el artículo 29, el acusador privado podrá ejercer la acción penal y solicitar el cambio de la acción penal de pública a privada y se someterá al mismo régimen que se aplica con los fiscales (Ley 1826 de 2017). Estas normas establecieron, entonces, las bases de la figura del acusador privado y la facultad de la víctima del delito para hacer uso de la mencionada figura que se encuentra presente en el ordenamiento jurídico colombiano.

También debe mencionarse que el artículo segundo del Acto Legislativo 06 de 2011 luego fue corregido por medio del Decreto 379 de 2012, porque el Ejecutivo consideró pertinente cambiar un yerro jurídico que se encontraba presente en dicho artículo relacionado con cómo se enmarcaba en el proceso de interpretación y aplicación práctica de la figura del acusador privado. Es necesario tener en cuenta que el artículo 2° del Acto Legislativo 06 de 2011 expresamente señalaba que “atendiendo la naturaleza del bien jurídico y la menor lesividad de la conducta punible” (Acto legislativo 06 de 2011).

De acuerdo con lo anterior, al momento de designar el ejercicio de la acción penal por la víctima u otras autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación debía realizarse atendiendo la naturaleza del bien jurídico y, la menor lesividad de la conducta punible, a considerar que, se puede efectuar ya sea teniendo en cuenta la naturaleza de “la descripción abstracta que el legislador hace de una conducta humana reprochable y punible” (Reyes,

1990, p. 96) o, teniendo como punto de partida, el hecho de que la conducta no afecta o lesiona considerablemente un bien jurídico que ha sido tutelado por mandato constitucional o legal. Por lo anteriormente expuesto, se evidencia que, como lo determina Calvete, la aplicación del acusador privado en Colombia, le permite a la víctima solicitar la posibilidad de apropiarse de la investigación y acusación de quien puede ser autor o partícipe de la conducta punible (Calvete, 2017), es por esto que, resulta conveniente examinar y realizar una comparación con un sistema jurídico en donde exista la figura del acusador privado, para determinar si hay similitud o no, para ello se realizarán algunas consideraciones en torno al sistema penal español.

4. El acusador privado en España

El régimen español establece en su norma fundante básica, específicamente en el artículo 124, que el Ministerio Fiscal es un órgano encargado de garantizar la administración de justicia, para lo cual debe operar en el aparato jurisdiccional bajo el marco del principio de legalidad, la prevalencia del interés público sobre el particular y el respeto de los Derechos Humanos de los ciudadanos, los cuales han sido definidos como mandatos que, como mencionan Agudelo & Riaño, son entendidos como los derechos de los que gozan todas las personas, que están establecidos en la declaración de 1948 y en las convenciones y pactos sobre los Derechos Humanos (Agudelo & Riaño, 2017, p. 65).

En ese sentido, estipula el mencionado precepto constitucional que el Ministerio Fiscal “actúa por mandato de la ley, de oficio o a petición de los interesados” (Cortes Generales de España, 1978). Además que, como lo explica Cancino, según la Ley orgánica del 30 de diciembre de 1981, el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones basado en el principio de unidad de actuación, por lo que es esa ley en donde se reconoce la facultad del fiscal (Cancino, 2002, pág. 507). No obstante, a pesar de dicha regla general de competencia de la acción penal, el legislador español determinó, en el artículo 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el Ministerio Fiscal, como titular principal de la acción penal, tiene la obligación de ejercitarla en los casos determinados previamente como punibles (Ministerio de Gracia y Justicia, 1883).

De manera que en dicho sistema jurídico es un principio estructural del Derecho Penal el ejercicio de la acción penal, sin embargo, tal mandato no es de monopolio exclusivo del

Ministerio Fiscal, pues el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal determina que “la acción penal es pública. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la ley” (Ministerio de Gracia y Justicia, 1883). Así pues el artículo 104 de la precitada ley determina que de los delitos de estupro, injuria y calumnia, la acción penal no podrá ser ejercida por personas distintas al ofendido y su representante. (Ministerio de Gracia y Justicia, 1883).

Por lo tanto, la acción penal en el sistema español tiene como titulares al Ministerio Fiscal y a los ciudadanos que operan bajo la figura del acusador particular. En ese tenor, el acusador privado puede ser, en primer lugar, el sujeto pasivo de la conducta punible directamente afectado con el despliegue de la acción u omisión típica, antijurídica y culpable; en segundo lugar, los individuos que tengan un interés general de protección – para lo cual el sistema trae a colación, el ejercicio de la acción popular de categoría penal que, fue categorizada como, un derecho de raigambre constitucional –; y en tercer lugar, las personas jurídicas que se vean afectadas en sus intereses por la comisión de un delito.

Para esclarecer lo expuesto anteriormente y basado en la sentencia STS 110/2020, “se hace referencia a 3 figuras de acusación que son: publica (perteneciente al Fiscal), particular (perteneciente al ofendido o perjudicado) y popular (perteneciente a cualquier ciudadano que no fue afectado ni ofendido con la conducta punible)” (Tribunal Supremo Madrid, 2020). Se hace mención a esto para marcar la diferencia que existe con la legislación colombiana, puesto que en esta última solo se le concedió la facultad de ejercer la figura del acusador privado a la víctima, mientras que en el caso español hay intervinientes en el proceso como los ya mencionados, que hacen que se pueda llevar a cabo el proceso. Es así como, en defensa de los intereses públicos, el poder estatal se materializa con la protección del perjudicado por una conducta punible (Tribunal Supremo Madrid, 2020) .

Sin embargo, en el art. 782 numeral 1 de la LECrim (Ley de Enjuiciamiento Criminal) sólo se hizo referencia a la acusación particular y al Ministerio Fiscal, pero no se elimina el derecho de la acción popular, pues se le admiten los derechos procesales para hacer parte del proceso, es decir, que el legislador admite la diferencia que existe entre los derechos del

perjudicado y los que tiene un tercero quien quiere velar por un interés público. (Tribunal Supremo Madrid, 2020).

Para terminar, es importante realizar algunas consideraciones en torno a la solicitud de conversión de la acción penal por medio de la figura del acusador privado en Colombia: es necesario tener en cuenta que dicha facultad es un mecanismo que le permite a la víctima por conducto de su abogado, o del estudiante de derecho adscrito al consultorio jurídico asignando para su caso, solicitar a la Fiscalía el ejercicio de la acción penal. Además, el artículo 29 de la Ley 1826 de 2017 señala que la conversión de la acción penal debe ser de común acuerdo entre las víctimas, esto cuando haya más de 1 víctima. Entonces, si se da inicio al trámite y hay un afectado que quiera hacer parte, es potestad suya hacerlo. Siendo así, el que tome las veces de acusador privado, tendrá las mismas facultades del fiscal y se regirá por las reglas del procedimiento abreviado. (Congreso de Colombia, 2017).

En ese contexto, la conversión de la acción penal pública en acción penal privada puede solicitarse ante el fiscal del caso o de conocimiento hasta antes del traslado del escrito de acusación: esta solicitud debe ser presentada de forma escrita por el apoderado de la víctima acreditando la condición de sujeto pasivo de la conducta punible; el término establecido para la resolución de fondo de dicha solicitud, al tenor del artículo 31 de la Ley 1826 de 2017, es de un mes desde la fecha de su recibo. Así mismo, la Ley 1826 de 2017 fue regulada por el Fiscal General de la Nación, que, en uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas en los artículos 250 de la Carta Política y 554 de la Ley 906 de 2004, profirió la Resolución 2417 de 2017, en donde se estableció la forma cómo se garantiza la verificación de la conversión de la acción penal en la entidad.

En dicha manifestación del máximo representante del ente acusador se determinó que el término que le corresponde a la Fiscalía General de la Nación para decidir sobre la solicitud de conversión de la acción penal, de conformidad con el artículo 26 de esta Resolución, es de 1 mes calendario, desde el recibo de la solicitud. Sin embargo, resulta contradictorio el hecho de que el parágrafo segundo del mencionado artículo estipule que el Fiscal General de la Nación puede resolver la solicitud de conversión en cualquier momento, lo que deja en un limbo jurídico las solicitudes de conversión de la acción penal que sean asignadas al Fiscal General, lo cual transgrede el principio de legalidad, de

coherencia y congruencia de las normas y manifestaciones que integran el modelo escalonado normativo, afecta la aplicabilidad eficaz de la figura y el propósito de descongestión judicial de la norma adoptada, lo que podría desencadenar en la vulneración de los derechos de raigambre constitucional que fueron establecidos para proteger a las víctimas en el marco del proceso penal.

Conclusiones

Teniendo en cuenta el planteamiento implícito en el interrogante investigativo del trabajo, en el sentido de las condiciones de aplicabilidad del acusador privado dadas las características de la organización del sistema penal nacional, que ese es el objetivo clave de la investigación, ésta apunta a, tal como lo determina el título de la misma, precisar conceptualmente los alcances y los límites que enmarcan el ejercicio de la acción penal privada.

En función del enfoque expuesto, es esencial tener en cuenta que históricamente tal ejercicio ha sido excepcional en Colombia por cuanto la Fiscalía ha sido el titular de la acción penal, es decir que ésta siempre ha sido un instrumento del Estado en todo lo relacionado con su naturaleza y condición de policía judicial. En tal sentido se puede concluir que la investigación ha alcanzado tal objetivo, ya que metodológicamente existe una estrecha conexión entre la pregunta de investigación y los objetivos de la misma, en cuanto estos últimos se derivan de aquella.

Ello se revela en el estudio por cuanto uno de los objetivos consiste en determinar los rasgos básicos del acusador privado, el cual ha sido incorporado al sistema penal colombiano mediante la Ley 1826 de 2017, con el fin de compararlo con la Ley 906 de 2004, que no lo contemplaba. Paralelamente, se procura llevar a cabo un procedimiento similar con el régimen jurídico penal español a fin de determinar las diferencias entre los dos regímenes jurídicos.

Debe decirse al respecto que no se trata de llevar a cabo únicamente una comparación de carácter formal entre el sistema jurídico penal colombiano y el español, sino de resaltar la naturaleza del acusador privado en uno y otro sistema. Como conclusión específica, se puede decir que la investigación presente logró sacar a la luz en qué medida los dos regímenes presentan similitudes muy cercanas, cuyas diferencias, además de los aspectos de naturaleza jurídica y funcional, son de índole gramatical y sintáctica.

Es decir, se logra precisar cuál es en el contexto legal colombiano la titularidad de la acción penal en términos de la figura del acusador privado y la forma como se podría asimilar o compaginar con la misma en el contexto español. No cabe duda, sin embargo, que dada la complejidad del tema y sobre todo por lo reciente de su inclusión en el

ordenamiento penal del país, se requerirán nuevas investigaciones, así como el análisis casuístico de diversos hechos específicos, con el fin de consolidar empírica y conceptualmente ese enfoque.

Así, en este punto y a manera de recomendación, a su vez derivada de las conclusiones, es posible proponer la elaboración de un estudio con el poder estadístico apropiado para extraer conclusiones y a la vez capacidad predictiva. Es decir, una investigación técnicamente diseñada, en la que desempeñen un papel significativo determinados modelos matemáticos y estadísticos, que proporcionen una guía sustentada en la evidencia empírica, acerca de lo que ha representado en el sistema penal colombiano el papel del acusador privado en los aspectos más significativos que se le atribuyen.

Se procedería elaborando una muestra lo más representativa posible seleccionada de distintas regionales de la Fiscalía General de la Nación, diseñada mediante un método estadístico de reconocida aceptación general, con el fin de que pueda proporcionar resultados altamente confiables acerca de la eficiencia del acusador privado en cuanto al alcance de objetivos tales como el descongestionamiento de los despachos judiciales y la rapidez del respectivo proceso, un aspecto clave en cuanto a los logros de la investigación.

Es por ello razonable concluir que, paulatinamente, la conversión de la acción penal pública a privada en el sistema jurídico colombiano debe ejercer un impacto progresivamente positivo, circunstancia que el trabajo resalta, al margen de los gastos que pudieren significar para las víctimas. Obviamente, estas deberán definir y sobre todo escoger si vale la pena incurrir en la carga financiera de tal conversión, fundamentalmente con el fin de acelerar el proceso, o por el contrario dejarlo en manos de la Fiscalía, ente que, además gratuitamente, está obligado a abordar la investigación en el caso de que las víctimas no tengan la intención de asumir los costos de la acusación y del proceso investigativo, o que simplemente no lo consideren pertinente. Tomando como referencia el índice Gini (Zuñiga, 2020), el cual es el indicado para medir la desigualdad en un país, se puede observar que Colombia teniendo un coeficiente de 50,8 sobre 0 que es la partida inicial para realizar la medición, se encuentra en el tercer lugar de países Latinoamericanos con un índice de mayor desigualdad y afecta directamente a lo referente al costo que tenga para las víctimas la conversión de la acción penal.

Expuesto así, se trata de uno de los aspectos fundamentales que destaca el presente estudio, por lo que se debe considerar en sentido conclusivo. En efecto, está ligado a la pregunta problema o de investigación, a los objetivos de ésta y al título, ya que la misma plantea la importancia de examinar en el marco de la titularidad de la acción penal en el contexto colombiano la figura del acusador privado, y a su vez subsiguientemente compararla con el papel que la misma desempeña en el sistema jurídico penal español, que es también, a grandes rasgos, otro de los fines trazados por el trabajo. Este último aspecto se ha adelantado incluso en un capítulo propio con el título “El acusador privado en España”.

Por otra parte, considerada como un todo la íntima conexión entre el título del trabajo, la pregunta de investigación y el objetivo principal de la misma, es claro que en conjunto configuran un eje temático compacto que es abordado por el estudio en función de la interrelación, por una parte, entre el acusador privado, el sistema penal acusatorio y la interacción progresiva entre estas dos instancias, y por otra la conversión de la acción penal de pública a privada. Este fenómeno tiene lugar empíricamente en forma que, para el estudioso, el analista y el investigador no son tan evidentes en primera instancia, pero que, si se enfocan integralmente en una visión de conjunto, son susceptibles de precisar y hacia ese objetivo apunta el estudio.

La anterior es una conclusión de gran importancia, debido a que involucra los elementos centrales de la investigación. Es en este contexto que resulta del mayor interés la comparación del acusador privado en Colombia y su equivalente español, ya que, aparte de las similitudes y diferencias formales y de fondo, que las hay en ambos sentidos, como el que en España la figura del acusador privado puede ser desempeñada por tres elementos diferentes, modelo que no tiene par en Colombia donde tal ejercicio debe ser encarado por medio del abogado de las víctimas, existen en los dos sistemas aspectos que los aproximan tanto conceptual como funcional y operativamente.

La conclusión en este punto, si bien específica, pero cuyas connotaciones abarcan la totalidad del trabajo en las tres instancias señaladas, o sea el título, la pregunta y los objetivos, consiste en que la idea rectora en los dos sistemas jurídicos, sin embargo, apunta básicamente a lograr una mayor eficiencia del aparato judicial en diversos niveles,

propósito que se encuentra en la base del estudio que se ha expuesto, que con tal fin se encamina a examinar la naturaleza, las características y las condiciones de la transformación del acusador público en privado.

Referencias

- Agudelo, O. &. (s.f.). Ciudadanía y nación: Políticas de control fronterizo e inmigración. *Novum Jus: Revista Especializada en Sociología Jurídica y Política*, 10(2), 57-75.
- Álvarez, A. (2017). *Apuntes de Derecho Procesal*. Bogotá: Doctrina y Ley.
- Arévalo, E & Fajardo, L (2013). *El derecho de las víctimas en el procedimiento penal colombiano, obtenido de:*
<http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/iaveritatem/article/view/574/701>
- Asamblea Nacional Constituyente. (10 de Octubre de 1991). Constitución Política de Colombia. *Gaceta Constitucional*(114).
- Bernal & Montealegre, (2013). El proceso penal. Fundamentos constitucionales y teoría general,
- Calvete, R (2017). *Análisis paso a paso del nuevo proceso penal especial abreviado y el acusador privado*. Obtenido de:
<https://www.ambitojuridico.com/noticias/analisis/penal/analisis-paso-paso-del-unevo-proceso-penal-especial-abreviado-y-el-acusador>
- Cancino, A (2002). La Fiscalía general de la Nación, evolución histórica y análisis crítico, Bogotá,
- Congreso de Colombia. (24 de julio de 2000). Ley 599, Por la cual se expide el Código Penal. *Diario Oficial*, CXXXVI (44097).

Congreso de Colombia. (24 de noviembre de 2011). Acto Legislativo 06. Por medio del cual se reforman los artículos 235 (numeral 4), 250 y 251 (numeral 1). *Diario Oficial*(48.263).

Congreso de Colombia. (12 de enero de 2017). Ley 1826, por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado. *Diario Oficial, CLII* (50114).

Consejo de Estado. (2010). *Sentencia No. Rad. 2007-294. Actor: Gerardo Bernal Montenegro. Demandado: Concejo Municipal de Desquebradas. C.P: Rafael Ostau de Lafont Pianeta.*

Consejo Superior de Política Criminal. (11 de agosto de 2015). *Concepto Consejo Superior de Política Criminal - Proyecto de ley número 48 de 2015 Senado - (Contravenciones Penales)*. Recuperado el 8 de diciembre de 2018, de <http://perseovalencia.blogspot.com/2017/01/ley-1826-de-2017-y-el-concepto-del.html>

Corte Constitucional (2002). *Sentencia C-228 Referencia: expediente D-3672, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett*

Corte Constitucional. (2008). *Sentencia C-879. Referencia: expedientes D-7208 y D-7211. M.P: Manuel José Cepeda Espinosa. .*

Corte Constitucional. (2009). *Sentencia C-762. Referencia: expediente D- 762. Demandante: Andrés Eduardo Dewdney Montero. M.P: JUAN CARLOS HENAO PEREZ.*

Corte Constitucional. (2015). *Sentencia C-699. Ref. Exp: D-10610. Demandante: Diego López Medina. M.P.: ALBERTO ROJAS RÍOS.*

Corte Suprema de Justicia. (2017). *Sentencia de Casación Penal. No. 44599. Providencia SP3168-2017. M.P: PATRICIA SALAZAR CUELLAR.*

Cortes Generales de España. (31 de octubre de 1978). Senado de España. *Boletín Oficial del Estado. Gaceta de Madrid, CCCXVIII*(311.1). Obtenido de Constitución

Española:

<http://www.senado.es/web/conocersenado/normas/constitucion/index.html>

Chaves, E (2012). *La accion penal privada y su implementacion en colombia*. Obtenido de <file:///C:/Users/Javier/Downloads/DialnetPrivateCriminalActionAndItsImplementat ionInColombi-4707865.pdf>

D'Onofrio, P. (1954). *Lecciones de Derecho Procesal*. Mexico: Jus.

Echandía, D. (1981). *Compendio de Derecho Procesal*. Bogotá: ABC.

Escrache, J. (1981). *Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia*. Madrid: Trotta.

Fernández, M. (1994) *Los límites del ius puniendi*. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es>

Ferrajoli, L. (1995). *Teoria del garantismo penal*. Madrid: Trotta.

Ferrajoli, L. (2011). *Principia Iuris*. (J. C. Bayón, Trad.) Madrid: Trotta.

Fiscalía General de la Nación. (Agosto de 2012). 20 años de la Fiscalía General de la Nación. *Huellas*, 75, 4-94.

Fiscalía General de la Nación, (2017), Resolución 2417 de 2017, obtenido de: https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/resolucion_fiscalia_2417_2017.htm

García, J. (2008) *Sobre el ius puniendi: su fundamento, sus manifestaciones y sus límites*. Obtenido de <https://revistasonline.inap.es/index.php/DA/article/view/9600/9601> "<https://revistasonline.inap.es/index.php/DA/article/view/9600/9601>"

Lopez. E (2007). *Introducción al derecho penal*. Obtenido de <http://diccionariojuridico.mx/definicion/ius-puniendi/>

Ministerio de Gracia y Justicia. (3 de enero de 1883). Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. *Boletín Oficial del Estado*, BOE-A-1882-6036(260). Recuperado el 25 de febrero de 2019, de [https://www.boe.es/eli/es/rd/1882/09/14/\(1\)/co](https://www.boe.es/eli/es/rd/1882/09/14/(1)/co)

Montero, J. (2010). *Derecho jurisdiccional I. Parte General*. Valencia: Tirant lo Blanch.

- Real Academia Española. (17 de Octubre de 2014). *Diccionario de la lengua española*, 23.^a ed, Madrid. Recuperado el 10 de junio de 2018, de <http://dle.rae.es/?id=0oKpOJX>
- Restrepo, J (2012) *La víctima del injusto penal, su derecho a la verdad y el acceso desde el control constitucional*, p 38. Obtenido de: ["https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/720/JuanGuillermo_RestrepoMaya_2012.pdf;sequence=1"](https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/720/JuanGuillermo_RestrepoMaya_2012.pdf;sequence=1)
- Reyes, A. (1990). *Derecho Penal*. Bogotá: Leyer.
- Ripolles, J. (2011). *Derecho penal español, Parte General* (3° ed.). Valencia: Tirant lo Blanch.
- Ruiz, R. (2007). *El Método Científico y sus Etapas*. México : Progreso.
- Salvatierra, C (2004) *Derecho Procesal Penal* 2° edición. México, p 53.
- Secretaria del Senado, (1991), *Constitución Política de Colombia*, obtenido de: http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
- Tribunal Supremo Madrid, (2020), *Sentencia de casación penal N° 110/2020, M.P EXCMO. SR. D. VICENTE MAGRO SERVET*
- Urbano, J (2006) *Los fines constitucionales del proceso penal como parámetros de control*. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/>
- Vargas, R. (2012). EL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL EN COLOMBIA. *Cuadernos de Derecho Penal*, 59-88.
- Velandia-Montes, R. (2014). Sobre la legitimidad de la opinión pública como sustento de la política penal. *Novum Jus: Revista Especializada en Sociología Jurídica y Política*, 8(1), 95-106.
- Velandia-Montes, R. (2015). *La punitividad electoral en las políticas penales contemporáneas*, Tomo II. Bogotá: Instituto Latinoamericano de Altos Estudios – ILAE–,
- Zuñiga, J (2020). La desigualdad en América Latina, obtenido de: <https://www.panoramical.eu/columnas/la-desigualdad-en-america->

